

# La guerra desde la barrera

Gabriel Guerra Castellanos

**A** sí como es fácil torear desde la barrera o dirigir a un equipo de fútbol desde el sillón de la sala, analizar un proceso complejo puede antojarse sencillo cuando no se conocen los detalles, vericuetos, matices y características que lo hacen único. Es el caso de la guerra mexicana contra el narcotráfico, cada vez más socorrida por cuentistas, novelistas y compositores, pero también —y de eso me ocupo y preocupo hoy— por analistas y académicos que pueden ayudar a formar o deformar las visiones que dentro y fuera de México existen en torno a este singularmente enredado y sangriento proceso en que nos encontramos inmersos.

Ya bastante grave resultó el intento por politizar la lucha del Estado contra el crimen organizado en la pasada elección. El PAN creyó hacerle un servicio al Presidente cuando en realidad le restaba involuntariamente legitimidad y fuerza a una lucha que debería ser de todos los mexicanos, o al menos de todas las fuerzas políticas y de todas las instancias del poder público.

Igualmente condenables las acciones de administraciones anteriores que o bien ignoraron el problema y lo dejaron crecer o permitieron complicidades criminales que se fueron enquistando a lo largo y ancho del país, en todos los niveles de gobierno y de las fuerzas del orden. Ya en los años 50 y 60, cuando el narcotráfico apenas asomaba su feo rostro, encargados de la seguridad nacional decidieron que el verdadero riesgo era otro, que las amenazas venían de la guerrilla incipiente o de los movimientos de terrorismo urbano que pretendían subvertir al sistema.

Fue así como el Estado mexicano cometió un primer error de origen, que habría de desembocar, muchos años y muchos errores más tarde, en el mayor desafío a la seguridad y a la estabilidad nacional del último siglo, uno que hoy amenaza a las instituciones y a los individuos y pone en duda la capacidad de ese mismo Estado de enfrentar con éxito a sus enemigos internos.

Mal hacen los que cuestionan la decisión del gobierno federal de declararle la guerra al crimen organizado sin antes preguntarse cuáles son las alternativas tanto del combate en sí —es decir las tácticas— como del concepto como tal —es decir las estratégicas. Hay muchas críticas válidas en lo que toca a la forma que está tomando ésta guerra, sobre todo en lo que se refiere al respeto de los derechos y las libertades individuales. Nadie puede condonar o absolver a priori violación o abuso alguno, ni tampoco pretender que en un conflicto armado como éste no se vayan a dar ilegalidades y excesos, que deben ser investigados y castigados con máximo rigor y severidad. Pero tampoco se puede plantear el regreso del ejército a los cuarteles cuando no existe una alternativa viable. Resulta cuando menos ingenuo pretender que

los cárteles y las grandes organizaciones criminales se vayan a replegar igualmente o que —estando como lo están en la cúspide de su poderío— vayan a aceptar volver al viejo estado de cosas, cuando limitaban su actuar y resolvían sus diferencias sin alterar en exceso el orden público.

Aplaudo que organismos de defensa de los derechos humanos busquen presionar por todos los medios al Estado para que cumpla con sus obligaciones de vigilar y respetar garantías y de investigar y castigar abusos, pero me cuesta más trabajo entender a quienes pugnan por la claudicación unilateral como único camino de defensa de los derechos individuales. O no entienden la magnitud del conflicto y del enemigo o buscan solamente la retórica fácil y simplista que reduce todo el debate a si deben o no participar las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico. Ojala todo fuera así de sencillo, que en México existiesen policías capaces de cumplir con las tareas que se les encomiendan, que los cárteles no tuvieran una capacidad de fuego superior a la de cualquier cuerpo policiaco, que las consecuencias de voltear la mirada no fueran tan graves.

No hay camino de regreso y no porque la estrategia del gobierno federal deba ser incuestionable o sea necesariamente la más acertada sino porque el poder del narcotráfico en México había alcanzado tales dimensiones que ya no era posible continuar por la vía de la simulación, la tolerancia, la corrupción o la complicidad. Si vemos los niveles a los que ha llegado el crimen organizado nos damos cuenta de su verdadero tamaño. No es que hayan adquirido ese potencial porque se les declaró la guerra; ya lo tenían.

De la misma manera en que no se puede ni debe politizar un asunto de Estado tampoco se vale minimizar ni simplificar el asunto. Es admirable la preocupación por las violaciones a los derechos humanos y a la legalidad; es comprensible cuestionar si la ruta para acabar con el problema de la drogadicción masiva y del poder de los traficantes no pasa por la legalización de al menos algunas drogas; lo es también cuestionar si están bien las prioridades de un gobierno que no invierte lo suficiente en educación y política social y que se enfoca en la seguridad como única alternativa. Todo eso se puede y se debe abordar, sin tabúes, sin prejuicios, porque lo que se ha hecho hasta ahora en el resto del mundo no parece servir de nada.

No hay espejo en que se pueda mirar México y decir que ahí está la imagen que busca. El caso colombiano es paradigmático en lo negativo: aceptar convertirse en el campo de batalla de una guerra que es al menos tan estadounidense como colombiana me parece un desacierto histórico, y los mexicanos deberíamos ver con preocupación cualquier tendencia a seguir ese ejemplo. Pero lamentablemente no existe un modelo alterno del que se pueda decir que sí funciona en algún otro lado con una problemática similar.

[www.twitter.com/guerrac](http://www.twitter.com/guerrac) [gguerra@goya.net](mailto:gguerra@goya.net)

